La educación jurídica en México. Prácticas y saberes desde la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1867-1897

Legal education in Mexico. Practices and knowledge from the National School of Jurisprudence, 1867-1897

Jessica COLÍN MARTÍNEZ*

RESUMEN: El texto aborda aspectos sustantivos de la educación y enseñanza del derecho en México durante el período que va de 1867 a 1897. A través del análisis de los planes y programas de estudio que siguió la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el artículo muestra los cambios asociados a la instrucción profesional de los abogados y su relación con la formación jurídica de la época. La codificación y la especialidad que por materias definió el desarrollo curricular en las aulas de jurisprudencia, refieren nociones dinámicas y complejas para la historia del derecho y de la abogacía.

PALABRAS CLAVE: Escuela Nacional de Jurisprudencia; educación jurídica; abogacía; historia del derecho; Ciudad de México.

* Becaria del Programa de Becas Posdoctorales en la UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Asesorada por el Dr. Óscar Cruz Barney. Maestra y Doctora en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa (UAM-C). Sus líneas de investigación versan sobre historia del derecho y de la abogacía, derecho penal y educación jurídica. Contacto: <jessica.colinmx@gmail.com>. Fecha de recepción: 16/11/2021. Fecha de aprobación: 22/10/2022.

ABSTRACT: The text addresses substantive aspects of the education and teaching of law in Mexico during the period from 1867 to 1897. Through the analysis of the study plans and programs that the National School of Jurisprudence followed, the article shows the changes associated with the professional instruction of lawyers and their relationship with the legal training of the time. The coding and the specialty that by subject defined the curricular development in the jurisprudence classrooms, refer to dynamic and complex notions for the history of law and the legal profession.

KEYWORDS: National School of Jurisprudence; legal education; law; history of law; Mexico City.

I. INTRODUCCIÓN

La enseñanza del derecho goza de una larga e importante tradición en México que se remonta hasta el período novohispano. Durante aquellas centurias se fundaron los primeros establecimientos destinados a la formación de abogados a semejanza de la educación superior que acontecía al otro lado del Atlántico. Desde 1551, apegándose a los estatutos de la Universidad de Salamanca, la Real y Pontificia Universidad de México albergó las facultades de cánones y leyes, cuyas primeras cátedras (Prima de Cánones y Prima de Leyes) comenzaron a impartirse en 1553. El *Corpus Iuris Civilis* fue un texto fundamental en la Facultad de Leyes, objeto de estudio en las cátedras Prima de Leyes, Instituta y Víspera de Leyes, también llamada Código,¹ cuyo desarrollo en *lectiones* o *lecturae*, *repetitiones* o *relectiones*, y *disputationes* correspondieron a su método educativo.²

Además de la Facultad de Leyes, durante el virreinato diversos colegios dieron cabida a la enseñanza del derecho con el debido reconocimiento de su contraparte universitaria. En la Ciudad de México, el Colegio de San Ildefonso fue uno de estos establecimientos cuya vida se extendió entre 1588 y 1867.³ En su azarosa y

¹ VARGAS VALENCIA, Aurelia, “La tradición jurídica romana en las cátedras de la Facultad de Leyes de la universidad novohispana”, en *Cátedras y catedráticos en la historia de las universidades e instituciones de educación superior en México. I. La educación colonial*, ALVARADO, María de Lourdes y PÉREZ PUENTE, Leticia (coords.), México, UNAM-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2016, pp. 208-209.

² TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, *Manual de historia del derecho español*, España, Tecnos, 2015, p. 199.

³ FLORES PADILLA, Georgina y HIDALGO PEGO, Mónica (eds.), *El Colegio de San Ildefonso de México: documentos de fundación y reglamentos (1573-1867)*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2010.

amplia trayectoria, esta institución jesuita replicó al interior de sus aulas los estudios de jurisprudencia según su propio esquema formativo, en apariencia mucho más dinámico y con mayores márgenes pedagógicos que el modelo seguido en la Universidad que permitió estimular las capacidades intelectuales de sus alumnos en la generalidad de las materias.⁴ Los siglos XVI y XVII observaron mínimos cambios en los contenidos y métodos de la educación jurídica, sin embargo, a lo largo del siglo XVIII con motivo de la crisis que acompañó al derecho, las tradicionales cátedras de leyes impartidas en San Ildefonso observaron una tímida pero decidida incorporación del derecho real o patrio y del derecho natural y de gentes (en 1771, Carlos III dio nuevos planes de estudio a las universidades).⁵ Indiscutido avance del iusnaturalismo, racionalismo y reformismo ilustrado.

Con la independencia del país, la enseñanza del derecho aventuró nuevos horizontes. El decreto del 19 de octubre de 1833 facultó al gobierno “para arreglar la enseñanza pública en todos sus ramos”.⁶ Disposición circunscrita al orden del Distrito Federal y Territorios. A ello correspondió el mandato de la Ley General de Instrucción Pública que llevó al Colegio de San Ildefonso a erigirse como la principal institución dedicada a los estudios de jurisprudencia en la Ciudad de México. El plan de estudios previsto en la ley incluyó las materias de Latinidad, Ética, Derecho natural, de

⁴ ÁVILA ÁVILA, Alan Omar, “El Colegio de San Ildefonso, 1612-1650”, Tesis de licenciatura en Historia, México, UNAM-Facultad de Filosofía y Letras, 2006, p. 29.

⁵ No obstante, por orden de Carlos IV, del 31 de julio de 1794, se prohibió terminantemente la enseñanza del derecho público, del derecho natural y el de gentes en las universidades, seminarios y facultades.

⁶ DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, *Legislación mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, t. II, México, Imprenta del Comercio, 1876, p 564.

gentes y marítimo, Derecho romano,⁷ Derecho canónico, Derecho político constitucional, Derecho patrio y Retórica. Proyecto reformador al que sucedieron años convulsos con ineludibles avances y repliegues en el ámbito educativo. Hacia 1865, con la supresión del Colegio de San Ildefonso, los estudios de jurisprudencia en la capital del país atravesaron por momentos sumamente precarios que encontraron un nuevo esquema de regularidad con la Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal del 2 de diciembre de 1867, bajo la presidencia de Benito Juárez.

El cuerpo legal mencionado dismanteló y fundó instituciones al unísono. Con esta ley desapareció el Colegio de San Ildefonso como institución de educación superior de raigambre novohispana para dar paso a la fundación de la Escuela Nacional de Jurisprudencia que, a partir de entonces, ocuparía con preponderancia un lugar en la enseñanza del derecho en la Ciudad de México y en el país. El artículo 9 de la ley orgánica estableció las cátedras que a partir de 1868 debieron impartirse en la escuela, mientras que los artículos 20, 21 y 24 precisaron aquellos aspectos relativos a trámites y verificación de exámenes, así como de la obtención del título de abogado. Preceptos fundacionales y de orden administrativo que, en principio, cimentaron la base que hubo de sostener el nuevo diseño institucional y pedagógico vinculado a la educación jurídica, con alcance para todo el territorio nacional.

Cabe resaltar que con la aprobación y publicación de cada plan y programa de estudio de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, fue práctica común que un importante número de institutos y escuelas de derecho asentadas en los estados de la república

⁷ El estudio del derecho romano, también llamado civil, comenzó a desarrollarse en las universidades españolas y novohispanas desde el siglo XVIII. Se consideró una materia necesaria en la formación del “criterio jurídico” de los estudiantes, asimismo “como antecedente o «ilustración» de las leyes vigentes”. ADAME GODDARD, Jaime, voz “Derecho romano”; CRUZ BARNEY, Óscar y SOBERANES FERNÁNDEZ, José Luis (coords.), *Diccionario de historia del derecho*, México, UNAM Porrúa, 2015, p. 136.

adoptaran sin mayores modificaciones dichas directrices, incluso las lecturas y textos que los alumnos debían seguir para cada cátedra. Modelo que pervivió con ligeros cambios entre 1867 y 1897. Proceso cuya trayectoria arrojó a un importante número de abogados en ciernes y también a la primera estudiante y egresada de la Escuela Nacional de Jurisprudencia: María Asunción Sandoval. Primera abogada en México quien desde 1898, mismo año en que obtuvo el grado, estableció su despacho en la 1ª calle de la Santísima en la Ciudad de México.

II. PLAN DE ESTUDIOS Y TEXTOS, 1867

De acuerdo con Díaz Covarrubias, la formación de abogados en México hacia el último tercio del siglo XIX presentaba un considerable índice de preferencia en comparación con otros ámbitos de educación profesional como la medicina, la farmacéutica o la ingeniería.⁸ En palabras del autor, dicho fenómeno se explicaba porque la educación jurídica se percibía como aquella con contenidos “bastante completos”. Concepción que se afianzaba, según su criterio, en una tradición sociocultural que había cobrado impulso con los gobiernos independientes que, aparentemente, habían procurado el buen orden de la abogacía y de su mejoramiento a través de diversos medios normativos e institucionales.⁹ Este

⁸ DÍAZ COVARRUBIAS, José, *La instrucción pública en México. Estado que guardan la instrucción primaria, la secundaria y la profesional en la República. Progresos realizados, mejoras que deben introducirse*, México, Imprenta del Gobierno, en Palacio, 1875, pp. 240-242.

⁹ Sobre esta afirmación y contraste, véase el caso del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Institución que precisamente durante el siglo XIX observó la gradual desarticulación de sus intereses gremiales, entre ellos, la colegiación obligatoria. Para una lectura puntual del tema: CRUZ BARNEY, Óscar, “El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México en el siglo XIX”, en prensa.

punto de vista sugiere que el supuesto interés generalizado del que gozaban los estudios de derecho en el país había repercutido en una mayor oferta educativa. Contexto en el que la Escuela Nacional de Jurisprudencia ocupó un lugar sobresaliente,¹⁰ en gran medida al posicionarse como institución articuladora de la enseñanza superior al suministrar los planes y programas de estudio que adoptaron sus pares en algunos estados de la república (aun cuando su elaboración en apariencia escapara de ese propósito), según diversos decretos y disposiciones de los ejecutivos locales que ordenaron la adopción programática.

La Ley Orgánica de Instrucción Pública del 2 de diciembre de 1867 señaló en el artículo 9 las cátedras que integraron el plan de estudios de jurisprudencia.¹¹ Materias que, de acuerdo con el artículo 17 del reglamento, obedecieron el siguiente orden (cuadro 1) donde resalta la continuidad del estudio del derecho eclesiástico en pleno proceso de secularización de la educación; además de la incorporación de las cátedras de procedimientos en los últimos años de enseñanza. El titular de esta última cátedra, tanto en materia civil como penal, señaló que era una de las más importantes en la

¹⁰ Este establecimiento concentró la mayor matrícula del país con una importante movilidad de sus alumnos, procedentes de casi toda la república. Datos oficiales indican que entre 1889 y 1899 la matrícula pasó de 116 a 231 alumnos inscritos. En cuanto a los alumnos titulados, en 1889 egresaron 9 abogados y en 1899 lo hicieron 23. *Breve noticia de los establecimientos de instrucción dependientes de la Secretaría de Estado y del Despacho de Justicia e Instrucción Pública*, México, 1900, p. 41.

¹¹ Para el mismo período, por ejemplo, los estudios de jurisprudencia impartidos en el Instituto Literario del Estado de Yucatán comprendían las siguientes materias: derecho natural, derecho romano, historia del derecho patrio, derecho privado o civil, derecho público constitucional y administrativo, derecho internacional (comprendiendo el marítimo), derecho penal, derecho mercantil, procedimientos civiles, procedimientos criminales, principios de legislación y legislación comparada. Véase la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Estado de Yucatán, publicada el 30 de junio de 1869.

instrucción jurídica: “no tiene más objeto que la discusión metódica del hecho [...]. En ella, como en todas las ciencias, plantear el problema con exactitud y claridad, es la base fundamental para una resolución acertada: y si plantear ese problema en un juicio civil es de grande trascendencia pública, resolverlo en el juicio criminal con la mayor garantía de acierto es de primera importancia social”.¹²

Cuadro 1. Plan de estudios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1867-1868

Año escolar	Cátedras
Primer año	Derecho natural Primer curso de Derecho romano
Segundo año	Segundo curso de Derecho romano Primer curso de Derecho patrio
Tercer año	Segundo curso de Derecho patrio Derecho eclesiástico
Cuarto año	Derecho constitucional y administrativo Derecho internacional y marítimo
Quinto año	Procedimientos civiles Principios de legislación Primer año en la Academia teórico-práctica de derecho Práctica en el estudio de un abogado o en un juzgado civil
Sexto año	Procedimientos criminales Legislación comparada Segundo año en la Academia teórico-práctica de derecho Seis meses de práctica con un abogado o juez de lo civil Seis meses de práctica en un juzgado criminal

Fuente: Reglamento a la Ley Orgánica de Instrucción Pública, 24 de enero de 1868. Dublán, Manuel y José María Lozano, *Legislación mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, Tomo X, México, Imprenta del Comercio, 1878, p. 245.

¹² “Lecciones pronunciadas en la Escuela de Jurisprudencia de México, por el profesor del ramo, Lic. Emilio Pardo”, *El Derecho*, México, 20 de noviembre de 1869, p. 324.

De este esquema se sigue que la duración de los estudios comprendía seis años, mismos en los que los alumnos debían presentar exámenes parciales o generales al concluir cada ciclo lectivo (octubre de cada año), cuya severidad era un aspecto que el reglamento estatuyó como forma para evaluar y acreditar el proceso de aprendizaje (artículo 48). La aplicación de estos exámenes generales correspondía a un jurado compuesto por tres profesores que, en un solo acto, debía evaluar todas las materias que correspondieran al año en cuestión (artículo 21). Cabe mencionar que estas disposiciones eran aplicables para jurisprudencia y demás escuelas superiores, lo mismo que la gratuidad de la educación al eximir a los estudiantes del cobro por derechos de inscripción o de examen. En el orden de evaluación de las cátedras, resalta la reglamentación de los llamados “cursos doblados” que planteó para los alumnos la posibilidad de acreditar materias de otros años escolares aun cuando no los hubieran cursado de manera ordinaria. Previsión que permitió a los estudiantes “abonar” dicho curso a su carrera y concluirla en menor tiempo (artículo 46). Práctica común durante las últimas décadas del siglo XIX, no sin la crítica de docentes y directivos.

La obtención del título de abogado culminaba con la presentación del examen profesional. Momento estelar precedido por la ineludible aprobación de las materias que integraban los estudios preparatorios y profesionales; por la acreditación de prácticas realizadas durante año y medio en el despacho de un abogado o en juzgados civiles; por la acreditación de prácticas en juzgados del ramo criminal por seis meses y; finalmente, por la asistencia a las academias de jurisprudencia del Colegio de Abogados por dos años (artículo 24 de la ley orgánica). Puntual trayectoria vinculada a las aulas y a diversos espacios de la práctica jurídica.

Los primeros egresados se apegaron a las determinaciones provisionales que a lo largo de 1868 tuvieron vigencia para la obtención del título: 1. Presentar el interesado una solicitud documentada para ser admitido a examen. 2. Nombrar tres catedráticos para fungir como sínodo, según el turno correspondiente. 3.

Leer el sustentante una disertación sobre el caso indicado (asignado con una anticipación de 48 horas). 4. El examen tendría la duración de una hora. En total, 34 alumnos fueron programados y aprobados durante aquel año. El primero de ellos, Blas Rodríguez, presentó examen el 4 de marzo de 1868 y fue aprobado por unanimidad.¹³ Por otro lado, para aquellas personas que sin haber cursado sus estudios en la Escuela de Jurisprudencia y desearan obtener el título de abogado, la legislación fijó un doble examen de conocimientos que precedió al profesional (artículo 41 de la ley orgánica).

Con la vigencia de la ley orgánica y su reglamento, la competencia de la Junta Directiva de Instrucción Pública fue fundamental en el sistema educativo del Distrito Federal, en especial por el grado de centralización que ejerció a través de múltiples tareas. Diseño nada ajeno al previsto en la propia Constitución de 1857 relativo a las facultades del Congreso de la Unión para el arreglo interior del Distrito que, por extensión, confirió por esa vía amplias atribuciones al ejecutivo federal. Sobresale en este esquema la competencia de la Junta para presidir y autorizar oposiciones a las cátedras, proponer al gobierno los nombramientos de catedráticos adjuntos y propietarios, examinar los documentos de los alumnos para la obtención del título profesional (asignando el pase respectivo para la presentación del examen), así como examinar los presupuestos escolares, examinar y aprobar los reglamentos interiores de las escuelas y proponer al gobierno los libros que debían servir de texto en el siguiente año escolar (artículo 58 de la ley orgánica). A ello se sumó, en la práctica, la intervención de la Junta (presidida por el ministro de Instrucción pero donde el presidente de la república ejercía un papel preponderante)¹⁴ para

¹³ AHUNAM, ENJ, Sección: Secretaría, Serie: Actas y Minutas, Caja 14, Exp. 5, Fojas 4-6.

¹⁴ De acuerdo con Andrés Lira, durante el último tercio del siglo XIX el ejecutivo federal logró imponerse como “poder de poderes” a través de facultades extraordinarias, entre ellas, para legislar y reformar leyes. “Derecho e

conocer y resolver las dificultades que se presentaran en la correcta administración de los establecimientos. De ello dan cuenta diversos oficios dirigidos por el director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia a la citada Junta de Instrucción, cuya frecuente respuesta por parte de ésta fue “el presidente de la república resolvió que...”.

Además de lo señalado, resalto aquí la atribución de la Junta (léase del presidente de la república) para aprobar, en última instancia, los textos que debían seguirse año con año para la enseñanza de las diferentes cátedras. El camino era el siguiente. Cada docente tenía la facultad para proponer los textos de estudio para su cátedra,¹⁵ propuesta que debía presentar ante el director de la escuela para su aceptación y conocimiento de la junta de profesores. Instancia administrativa que remitía la documentación correspondiente a la Junta de Instrucción (cuatro meses antes de terminar el año escolar) para su evaluación y aprobación. Proceso que culminaba con un oficio donde se comunicaba la anuencia gubernamental a la lista de textos. Años más tarde, y con ligeras variaciones en el procedimiento señalado, la bibliografía obligatoria para cada una de las cátedras se publicó en el Diario Oficial y prensa.

Los textos que tuvieron presencia en las aulas durante los cursos de 1869 se enlistan en el cuadro 2. Resalta la ausencia de obras para las materias de derecho romano y patrio, incluso para eclesiástico. Además, sin ser un asunto menor, que se trató de textos en su mayoría extranjeros, reflejo de la importante carencia de

historia”, MIJANGOS, Pablo (coord.), *Historia Del Derecho, ¿Para Qué?*, México, Tirant lo Blanch, 2020, p. 62.

¹⁵ El artículo 58, fracción primera, de la ley orgánica de 1867 señaló que los textos propuestos debían sujetarse a las siguientes bases: “que se prefieran en igualdad de circunstancias los autores nacionales a los extranjeros; que se elijan aquellos cuyo método de enseñanza sea más práctico; que en lo posible la enseñanza se uniforme, de modo que no haya contradicción en las doctrinas esenciales de los diversos autores que se sigan en una misma carrera”.

literatura jurídica nacional. Con ello me refero en sentido estricto a ensayos y demás textos doctrinarios o de análisis normativo con base en la legislación mexicana. Situación que se revertiría de forma sincrónica en la medida que el proceso codificador consolidó el sistema jurídico liberal mexicano.

Cuadro 2. Textos aprobados en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1869

Cátedra	Texto
Derecho internacional	Wheaton, Henry. (1866). <i>Elements of International Law</i> . Por Richard Henry Dana, Jr. Boston, 8ª ed.
Derecho marítimo	Sierra O'Reilly, Justo. (1854). <i>Lecciones de Derecho Marítimo Internacional</i> . México: Imprenta de Ignacio Cumplido.
Derecho constitucional y administrativo	Constitución Federal de 1857. Story, Joseph. (1858). <i>Commentaries on the Constitution of the United States: with a preliminary review of the constitutional history of the colonies and states, before the adoption of the Constitution</i> . Boston: Little, Brown and Company. ¹
Derecho mercantil	Navarro Zamorano, Ruperto (1866). <i>Tratado legal sobre las letras de cambio, libranzas, vales, pagarés o billetes a la orden y cartas órdenes de crédito, con arreglo al Código de comercio y las demás leyes vigentes al que acompañan modelos de todos estos documentos de giro y de las demandas y actos judiciales que a ellos se refieren, y un apéndice que contiene las leyes vigentes sobre la materia en los Estados de Europa</i> . México: Imprenta de Abraham González.
Derecho penal (integrado en las cátedras de derecho patrio)	Gómez de la Serna, Pedro y Juan Manuel Montalbán. (1852). <i>Elementos del derecho civil y penal de España. Precedidos de una reseña histórica de la legislación española</i> . México: Imprenta de Ignacio Cumplido.

Fuente: AHUNAM, ENJ, Sección: Dirección, Serie: Asuntos Generales, Caja 4, Exp. 1, Fojas 22-22v y 36.

Este diseño en la enseñanza del derecho supuso una pronta revisión, situación que sugiere su carácter transitorio en el contexto curricular positivista de los gobiernos liberales. Los profesores de la Escuela de Jurisprudencia, los juristas José María del Castillo Velasco, José María Iglesias e Isidro Montiel y Duarte, consideraron que el plan de estudios de 1867 adolecía de materias fundamentales en la formación jurídica de los alumnos. Desde su perspectiva, Economía política y Medicina Legal eran algunas omisiones que debían solventarse con urgencia, aunque no las únicas. Señalaron que la incorporación de contenidos en historia del derecho romano e historia del derecho español eran materias esenciales que los estudiantes debían cursar desde el inicio de la carrera, seguidas por el estudio del derecho natural, del derecho patrio y derecho administrativo (sin omitir el derecho minero, mercantil y marítimo), además de casos prácticos en materia civil y criminal. Sobre este análisis al plan de estudios, los juristas advirtieron, además, que la institución debía fortalecer la enseñanza, “con toda la perfección posible”, del castellano, latín, francés e inglés.¹⁶

¹⁶ El estudio del latín era concebido como “la llave de las fuentes históricas de la jurisprudencia romana de donde deriva la nuestra”. Respecto del conocimiento del francés, los juristas señalaron indispensable su conocimiento para que los alumnos pudieran consultar el código de Napoleón, “que es el cimiento de la jurisprudencia moderna, fundada en las citas y autoridades de los comentadores, pero principalmente en las demostraciones filosóficas del razonamiento”. Por último, en relación con el inglés, subrayaron su importancia “para estudiar en sus fuentes las instituciones democráticas de los norteamericanos que tanto han influido y seguirán influyendo en nuestro derecho político”. AHUNAM, ENJ, Sección, Dirección, Serie: Asuntos Generales, Caja 4, Exp. 1, Fojas 31-32v.

III. PLAN DE ESTUDIOS Y TEXTOS, 1869

Algunas de las precisiones antes señaladas fueron escuchadas en el ámbito parlamentario y de gobierno. La legislación que sustituyó a aquella promulgada en 1867 llegó solo un par de años más tarde. El 15 de mayo y 9 de noviembre de 1869 se publicaron, respectivamente, una nueva Ley Orgánica de Instrucción Pública para el Distrito Federal y un reglamento. Con ello, se ratificaron aspectos que continuaron sin altibajos a lo largo del siglo, entre ellos, el intervalo de seis años de los estudios de jurisprudencia, la dinámica respecto de los exámenes parciales o generales y para la obtención del título de abogado, lo mismo en relación con la Junta de Instrucción que afianzó sus atribuciones en la centralización de la política educativa. Los cambios introducidos en el plan de estudios, aunque en apariencia mínimos, sugieren una de las discusiones que por lustros acompañó los pretendidos propósitos de la educación jurídica a través de la enseñanza de Economía política y Sociología. Si bien para ese momento la primera de las cátedras ocupó la mayor atención.

Desde la perspectiva de los juristas Emilio Pardo, José María del Castillo Velasco e Isidro Montiel y Duarte la materia de Economía política debía estudiarse no como un ramo secundario en el plan de jurisprudencia, sino de manera tan profunda como fuera posible por tratarse de una “ciencia” que podía evitar “la difusión de errores trascendentales” que mermaban el desarrollo del país. Postura que si bien aludía a un amplio espectro del conocimiento y de su aplicación y práctica, ceñía una intención científicista que consideraban cardinal para robustecer la formación intelectual de los abogados. Cabe resaltar que la incorporación de economía política significó, en sentido inverso, la supresión de la cátedra de derecho eclesiástico en el plan de estudios promulgado en 1869. Sin duda, “la razón en lugar del dogma” fue el precepto liberal

determinante que, como ha señalado Bazant, estimuló el laicismo en la esfera pública como las aulas.¹⁷

El reglamento de la ley orgánica publicado el 9 de noviembre de 1869 precisó en el artículo 16 la distribución anual de las cátedras (cuadro 3). En él se observa la ausencia de un curso dedicado especialmente al estudio del derecho criminal o penal, contenido integrado en las cátedras de derecho patrio cuyo énfasis era la materia civil, y en la de procedimientos durante el último año de la carrera. Sería hasta finales de la década de 1870 que este particular aspecto ocuparía la atención de catedráticos y autoridades con el propósito de asentar de manera expresa su incorporación en el plan de estudios.

Cuadro 3. Plan de estudios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1869

Año escolar	Cátedras
Primer año	Derecho natural Primer curso de Derecho romano
Segundo año	Segundo curso de Derecho romano Primer curso de Derecho patrio
Tercer año	Segundo curso de Derecho patrio Economía política
Cuarto año	Derecho constitucional y administrativo Derecho internacional y marítimo
Quinto año	Procedimientos civiles Principios de legislación
Sexto año	Procedimientos criminales Legislación comparada

Fuente: Reglamento a la Ley Orgánica de Instrucción Pública, 9 de noviembre de 1869. DUBLÁN, Manuel y José María LOZANO, *Legislación mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independen-*

¹⁷ BAZANT, Mílada, *En busca de la modernidad. Procesos educativos en el Estado de México 1873-1912*, México, El Colegio Mexiquense, El Colegio de Michoacán, 2002, p. 19.

cia de la república, t. X, México, Imprenta del Comercio, 1878, p. 756.

El esquema normativo en materia educativa, y en particular para la enseñanza jurídica, mostró a lo largo del período las recurrentes intenciones del gobierno para reformar leyes y reglamentos según su libre interpretación aún sin que los cambios lograran afianzar, en muchos casos, años lectivos para evaluar su conveniencia y posibles enmiendas. Para diciembre de 1870, un año después de promulgada la ley de instrucción y su reglamento, se discutió en la Cámara de Diputados un nuevo proyecto en materia de instrucción pública para el Distrito Federal con el que se buscó derogar la legislación de 1869. Los “pésimos y fatales” resultados que en apariencia mostraba el ramo, llevaron a algunos diputados a plantear la posibilidad de adoptar de nueva cuenta la ley de instrucción de 1843 que, desde su punto de vista, “había dado buenos resultados por más de veinte años”. Desde una postura contraria, el diputado Guillermo Prieto refirió el pensamiento progresista de la ley vigente (en especial para la escuela de jurisprudencia), de la libertad de enseñanza y de los peligros de adoptar la vieja ley de 1843.¹⁸ Misma opinión compartía el ministro de Justicia e Instrucción, quien señaló que adoptar de nueva

¹⁸ En 1873 el debate sobre la libertad de cátedra cobró importantes proporciones. Vicente Rodríguez Miramón, entonces alumno de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, señaló la intención del gobierno federal de limitar la libertad de los docentes en la impartición de sus cátedras. La opinión oficial plasmada en el *Diario Oficial* sugería que si los profesores emitían críticas a las instituciones y leyes, ello significaba estar en desacuerdo con el gobierno, lo que equivalía a “una propaganda revolucionaria”. Para el joven Rodríguez Miramón, esta postura no era sino un “ataque a la justicia, a la lógica y al buen sentido”. La alocución era concluyente: “¿queréis señores que se establezca una policía encargada exclusivamente de vigilar en nuestras cátedras si en ellas la enseñanza es o no contraria a las instituciones y leyes vigentes, en el sentido de intolerancia que habéis querido imprimirle? (...) procurad encontrar esbirros bastante competentes y autorizados para hacer esa clase de calificación”. RODRÍ-

cuenta la citada ley de 1843 sin duda sería una mala decisión, en especial porque ello, entre otros aspectos, significaría la supresión de la escuela secundaria para niñas, “que no se puede prescindir, porque la mujer está llamada a perfeccionar y cultivar su inteligencia”. El ministro añadió, finalmente, que la ley vigente no era “tan mala” y los ataques de que era objeto se referían en exclusiva a la escuela preparatoria.¹⁹

Cabe señalar que con la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867 se llevaron a la palestra los propósitos de la educación liberal y positivista durante el último tercio del siglo XIX. Gabino Barreda, impulsor del diseño curricular,²⁰ fue un personaje que en igual proporción aglutinó loas y descalificaciones, estas últimas expresadas en mayor medida por los sectores conservadores de la Ciudad de México al señalar los supuestos peligros de una educación científicista y metódica que, alejada de la guía religiosa, la opinión de la época asoció a la “inmoralidad y egoísmo”. El tema central era el qué y el cómo de la instrucción pública en el contexto liberal mexicano. Perspectivas que se debatieron largamente en la prensa y otros espacios.

En relación con la enseñanza jurídica, el debate no fue menos impetuoso. El diputado y jurista Juan José Baz sostuvo que

GUEZ MIRAMÓN, Vicente, “La protesta de los profesores y la Escuela Especial de Jurisprudencia”, *El Foro*, México, 22 de octubre de 1873, p. 1.

¹⁹ “Cónica parlamentaria”, *El Siglo Diez y Nueve*, México, 15 de diciembre de 1870, pp. 1-2.

²⁰ En palabras de Barreda: “Una educación en que ningún ramo importante de las ciencias naturales quede omitido: en que todos los fenómenos de la naturaleza, desde los más simples hasta los más complicados, se estudien y se analicen, a la vez teórica y prácticamente, en lo que tienen de más fundamental; una educación en la que se cultive así, a la vez, el entendimiento y los sentidos, sin el empeño de mantener por fuerza tal o cual opinión, tal o cual dogma político o religioso”, *Atlas histórico de la Escuela Nacional Preparatoria. Desde su fundación hasta los momentos de celebrarse el centenario de la proclamación de la Independencia*, México, 1910, sin página.

“los estudios que hoy se hacen en todas partes son más variados que los antiguos, pero menos sólidos. En esta universalidad comprendo a la Escuela de Jurisprudencia; desearía que se estudiaran menos materias y que se perfeccionasen más los discípulos en las que son esenciales al abogado”.²¹ El proceso de codificación y la especialidad que por materias definió la formación jurídica de la época, sin duda repercutió en el mundo de los abogados, no solo en su quehacer práctico acaso ceñido a las materias civil y criminal, sino en su educación e integral preparación profesional. No puede omitirse en tal sentido el cambio generacional y los ímpetus de una profesión asociados a una transición jurídica liberal que hacia el último tercio decimonónico lograba afianzarse no sin retrocesos. Véase, por ejemplo, el caso de la Escuela Católica de Jurisprudencia en la Ciudad de México, fundada como franca reacción conservadora a la directriz positivista en la instrucción pública superior.²² No obstante estos intentos, la educación de los abogados continuó su trayectoria entre planes y programas, entre leyes y reglamentos, cada uno con reformas y proyectos, pero sin alejarse de su orientación liberal.

²¹ “El sr. D. Juan J. Baz”, *El Siglo Diez y Nueve*, México, 16 de octubre de 1872, p. 3.

²² Uno de los primeros registros de la Escuela Católica de Jurisprudencia corresponde a la convocatoria para el período de inscripciones del ciclo escolar de 1879. Por alrededor de un lustro, la escuela dio apertura con regularidad a los años lectivos. En los anuncios publicados por la escuela se señalaba el buen orden de la vida escolar, mensaje especialmente dirigido a los padres para motivar el envío de sus hijos a la capital del país con la confianza de que no éstos no perderían su faro moral. No obstante, la aparente ruptura con el modelo curricular de esta escuela no fue tal. La escuela católica siguió casi con exactitud el plan de estudios de la Nacional de Jurisprudencia (a excepción de la cátedra de derecho canónico que no se impartía en la nacional), lo mismo que los textos para las cátedras. Otro ejemplo institucional de educación católica para los abogados correspondió a la Escuela de Jurisprudencia de la Sociedad Católica de Guadalajara que entre 1869 y 1870 dio apertura a sus primeros cursos.

Ahora bien, la década de 1870 además de contextualizar la influencia positivista en los contenidos educativos, también concernió al avance decisivo del proceso codificador en México. A dicho período correspondió la elaboración, aprobación e impulso de diversos proyectos normativos que dieron vigencia a los primeros códigos liberales en el Distrito Federal (civil de 1870, penal de 1871 y de comercio de 1884) cuya influencia llevó a su adopción en gran parte de los estados de la república. Este fenómeno concernió en igual medida al orden jurídico local, como a la formación de los abogados desde las aulas. Así lo constatan diversas obras como las *Instituciones de derecho civil según el Código del Distrito Federal y territorio de la Baja California* (México: Imprenta de Díaz de León y White, 1874), de Esteban Calva y Francisco de P. Segura, uno de los primeros ensayos doctrinales en materia de codificación civil. Obra que desde su publicación se adoptó de inmediato como libro de texto en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y también en algunas otras al interior de la república como en Guanajuato, Michoacán, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. Otro texto significativo fue el *Derecho penal comparado o Código penal del Distrito Federal y territorio de la Baja California* (México: Imprenta del Comercio de Nabor Chávez, 1874), concordado y comentado por el profesor de la Escuela de Jurisprudencia José María Lozano. Obra fundamental para los estudiantes de derecho quienes, por varios lustros hasta comienzos del siglo XX, debieron recurrir a sus páginas.

De esta manera, en pleno desarrollo codificador, la Escuela Nacional de Jurisprudencia incorporó a su ámbito de enseñanza diversas obras que dieron cuenta de este proceso (cuadro 4), ello con el visto bueno del gobierno federal que, a través de la Junta Directiva de Instrucción Pública, aprobó los textos que sirvieron a los alumnos en su instrucción. Para el ciclo escolar de 1875, fueron los siguientes:

Cuadro 4. Textos aprobados en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1875

Año	Cátedra	Texto
Primero	Derecho natural	Ahrens, Henri. (1868). <i>Cours de droit naturel ou de philosophie du droit, complété, dans les principales matières, par des aperçus historiques et politiques</i> . Leipzig: F. A. Brockhaus.
	Primer curso de Derecho romano	Ortolan, Joseph-Louis-Elzéar. (1870). <i>Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien... Précédée de l'Histoire de la législation romaine, et d'une Généralisation du droit romain</i> . Paris: Henri Plon, 8e éd.
Segundo	Segundo curso de Derecho romano	El mismo que corresponde al primer curso.
	Primer curso de Derecho patrio	Calva, Esteban y Francisco de P. Segura. (1874). <i>Instituciones de derecho civil según el Código del Distrito Federal y territorio de la Baja California</i> . México: Imprenta de Díaz de León y White. Viso, Salvador del. (1868). <i>Lecciones elementales de derecho civil, que con arreglo al programa de enseñanza compuso el Dr. Salvador del Viso</i> . Valencia: Juan Mariana y Sanz, 3ª ed. Gutiérrez, Blas José. (1868). <i>Leyes de reforma. Colección de las disposiciones que se conocen con este nombre, publicadas desde el año de 1855 al de 1868</i> . México: El Constitucional.
Tercero	Segundo curso de Derecho patrio	Los mismos que corresponden al primer curso.
	Economía política	Prieto, Guillermo. (1871). <i>Lecciones elementales de economía política. Dadas en la Escuela de Jurisprudencia de México en el curso de 1871</i> . México: Imprenta del Gobierno en Palacio. Nociones de legislación hacendaria.

Cuarto	Derecho constitucional y administrativo	Castillo Velasco, José María del. (1871). <i>Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano</i> . México: Imprenta del Gobierno, en Palacio. Castillo Velasco, José María del. (1874). <i>Ensayo sobre el derecho administrativo mexicano</i> . México: Taller de Imprenta de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres.
	Derecho internacional y marítimo	Bluntschli, Johann Caspar. (1871). <i>El derecho internacional codificado</i> . Traducción, adiciones y notas de José Díaz Covarrubias. México: José Batiza. Leyes mexicanas sobre derecho internacional.
Quinto	Procedimientos civiles	Código de procedimientos civiles concordado con el civil y con el penal. Leyes vigentes sobre esta materia
	Principios de legislación	La obra de Bentham, "Principios de legislación civil y penal". ²
Sexto	Procedimientos criminales	Pallares, Jacinto, (1874). <i>El Poder Judicial o Tratado completo de la organización, competencia y procedimientos de los tribunales de la República Mexicana</i> . México: Imprenta del Comercio de Nabor Chávez.
	Legislación comparada	Lozano, José María. (1874). <i>Derecho penal comparado o Código penal del Distrito Federal y territorio de la Baja California</i> . México: Imprenta del Comercio de Nabor Chávez. Lozano, José María. (1873). <i>Derecho hipotecario comparado. Obra escrita en forma de lecciones para uso de los alumnos de la Escuela Especial de Jurisprudencia</i> . México: Imprenta de J. M. Aguilar Ortiz. Navarro Zamorano, Ruperto (1866). <i>Tratado legal sobre las letras de cambio, libranzas, vales, pagarés o billetes a la orden y cartas órdenes de crédito, con arreglo al Código de comercio y las demás leyes vigentes al que acompañan modelos de todos estos documentos de giro y de las demandas y actos judiciales que a ellos se refieren, y un apéndice que contiene las leyes vigentes sobre la materia en los Estados de Europa</i> . México: Imprenta de Abraham González.

Fuente: *La Voz de México*, México, 6 de enero de 1875, p. 3.

IV. PLAN DE ESTUDIOS Y TEXTOS, 1877

Después de los intentos iniciados en el año de 1870 por reformar la ley de instrucción pública, las primeras modificaciones efectivas se plasmaron en el decreto del 6 de enero de 1877. Esta reforma ocurrió bajo la presidencia de la república de Juan N. Méndez. En lo relativo a la enseñanza jurídica, el decreto definió un nuevo plan de estudios (cuadro 5) cuya trascendencia se centró en la incorporación de las cátedras de derecho criminal (principios de legislación penal) y de medicina legal. Además de ello, el orden de las materias en los diferentes períodos lectivos presentó algunas alteraciones puntuales que correspondieron a Economía política, que de tercer año se trasladó al cuarto ciclo escolar, y a Legislación comparada (con énfasis en el estudio comparado del derecho constitucional de los EE.UU), que del último año se llevó al quinto.

Cuadro 5. Plan de estudios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1877

Año escolar	Cátedras
Primer año	Derecho natural Primer curso de Derecho romano
Segundo año	Segundo curso de Derecho romano Primer curso de Derecho civil patrio
Tercer año	Segundo curso de Derecho civil patrio Principios de legislación penal vigente
Cuarto año	Derecho constitucional y administrativo Derecho internacional y marítimo Economía política
Quinto año	Procedimientos civiles Legislación comparada
Sexto año	Procedimientos criminales Medicina legal

Fuente: Decreto de reforma a la Ley Orgánica de Instrucción Pública, 6 de enero de 1877. DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, *Legislación mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, t. XV, México, Imprenta y Litografía de Eduardo Dublán y Comp., 1886, p. 129.

En términos comparados, la facultad de derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, contempló, alrededor de aquel año de 1877, las siguientes cátedras: derecho civil, derecho internacional, derecho romano, derecho comercial, derecho penal, derecho administrativo y derecho constitucional. Estudios que se cursaban en un período de cinco años.²³ Esta temporalidad de cinco años de la enseñanza del derecho también tuvo presencia en México, si bien la Escuela de Jurisprudencia con el plan de estudios 1907 redujo en un año los estudios superiores al pasar de seis a cinco, algunas otras escuelas de la república ya seguían planes de cinco años durante las últimas décadas decimonónicas. Fue el caso, por ejemplo, del Instituto Literario del Estado de Hidalgo que, con la aprobación del plan de estudios de enero de 1878, programó las siguientes cátedras: primer año: derecho natural, principios de legislación y primer curso de derecho romano; segundo año: segundo curso de derecho romano y primer curso de derecho patrio; tercer año: segundo curso de derecho patrio, código de procedimientos y economía política; cuarto año: derecho internacional y marítimo, derecho constitucional y administrativo, derecho penal y primer año de práctica; quinto año: procedimientos en materia criminal, medicina legal, código de minería, legislación comparada y segundo año de práctica.

Continuando con la reforma a la ley de instrucción pública de 1877, las acotaciones para los catedráticos significaron, en sentido amplio, el contenido de la enseñanza bajo el mandato y/o visión del gobierno durante el período. Por ejemplo: el profesor de derecho natural debía terminar sus lecciones con un resumen de los principios comunes a las legislaciones positivas de “los pueblos civilizados”; los profesores de derecho patrio debían incorporar el contenido de la materia mercantil; el profesor de principios de legislación debía encargarse “exclusivamente del derecho penal

²³ CALVO, Carlos, “La instrucción en la República Argentina. Estudio de legislación y de estadística comparadas”, trad. Miguel Macedo, en *El Foro*, México, 17 de enero de 1877, p. 43.

patrio”; en tanto, el profesor de legislación comparada, debía limitarse a la comparación de los derechos constitucionales, patrio y norteamericano. Finalmente, como corolario de la disposición presidencial en el orden de la educación jurídica, el decreto de referencia puntualizó que: “El ciudadano presidente considera que la instrucción de la juventud debe basarse sobre hechos positivos, sobre la experiencia y sobre las necesidades sociales, y de ninguna manera sobre antiguos sistemas que no han producido sino estériles disputas, sin conducir a ninguna aplicación práctica y benéfica para la humanidad”. Mensaje cuyo destinatario era sin duda aquel sector de la opinión pública que rebatía la educación positivista. No sin advertir reformas futuras, el presidente confió al “patriotismo” de los catedráticos de jurisprudencia el buen orden del nuevo plan de estudios.

El tema no era menor, durante varios años convocó a las voces y personalidades más destacadas del foro mexicano. A manera de respuesta y probable defensa a la labor docente que continuó en medio de una discusión sumamente polarizada, el director de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, José María del Castillo Velasco, declaró lo siguiente a las autoridades del gobierno federal: “Los muchos años durante los cuales han ejercido el profesorado los catedráticos de esta Escuela, son una demostración de su aptitud para desempeñarlo, supuesto el buen éxito que han tenido en su ejercicio y el respeto que han sabido conquistar entre sus discípulos”.²⁴ Palabras con una carga política ineludible que po-

²⁴ “La Escuela de Jurisprudencia”, *El Siglo Diez y Nueve*, México, 26 de febrero de 1881, p. 1. La réplica a del Castillo Velasco la dio de manera enérgica el profesor Miguel Macedo quien acusó al director de haber omitido mencionar a destacados profesores de la Escuela de Jurisprudencia: “al lado de los hombres de la talla de los Tagle y de los Eguía Lis, pueden figurar, tienen derecho a figurar, los Castilla Portugal, los Gutiérrez, los Pallares, los Contreras, los Segura y los Ramírez. Hacer mención especial de sus nombres no es elogiarlos, es recordar sus servicios olvidados en un documento oficial. Cuando la aptitud se haya ligada a la laboriosidad, es un deber reconocerla”. Véase “Ni son todos los

sicionaba a la institución, a sus profesores y demás autoridades educativas como importantes actores en la compleja trama decimonónica. Con el nuevo plan de 1877, los textos aprobados (cuadro 6) siguieron la distribución aquí señalada:

Cuadro 6. Textos aprobados en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1879

Año	Cátedra/Profesor	Texto
Primero	Derecho natural Lic. Jacinto Pallares	Bentham, Jeremias. (1823) <i>Tratados de legislación civil y penal</i> . Trad. Ramón Salas. Paris: Masson. ³ Eschbach, Prosper. (1856). <i>Cours d'introduction générale à l'étude du droit, ou Manuel d'encyclopédie juridique</i> . Paris: Cotillon, 3e éd.
	Primer curso de Derecho romano Lic. José Torres Torija	Ortolan, Joseph-Louis-Elzéar. (1870). <i>Explication historique des Instituts de l'empereur Justinien... Précédée de l'Histoire de la législation romaine, et d'une Généralisation du droit romain</i> . Paris: Henri Plon, 8e éd. Bronchorst, Ever. (1868). <i>Explicaciones del jurisculto Ever Bronchorst al Título del Digesto, de diversas reglas del derecho antiguo</i> . Trad. Pedro Ruano. México: Imprenta de Lara. ⁴
Segundo	Segundo curso de Derecho romano Lic. Joaquín Eguía Lis	La obra de Ortolan señalada en el primer curso. Savigny, Friedrich Karl von. (1870). <i>Traité de la possession en droit romain</i> . Trad. Henri Staedtler. Belgique: Bruylant-Christophe. ⁵
	Primer curso de Derecho civil patrio Lic. Esteban Calva	Gómez de la Serna, Pedro y Juan Manuel Montalbán. (1852). <i>Elementos del derecho civil y penal de España. Precedidos de una reseña histórica de la legislación española</i> . México: Imprenta de Ignacio Cumplido. Lecciones orales del profesor sobre la legislación intermedia entre la española y los modernos códigos, sirviendo de base, además del código civil, la obra <i>Novísimo Sala Mexicano o ilustración al derecho real de España</i> . (1870). Con notas de José María de Lacunza. México: Imprenta del Comercio de Nabor Chávez. Calva, Esteban y Francisco de P. Segura. (1874). <i>Instituciones de derecho civil según el Código del Distrito Federal y territorio de la Baja California</i> . México: Imprenta de Díaz de León y White. Ordenanzas de minería.

que están, ni están todos los que son”, *El Foro* (México), 15 de marzo de 1881, p. 191.

Tercero	Segundo curso de Derecho civil patrio Lic. Juan N. García Peña	Los mismos que corresponden al primer curso. Pradier-Fodéré, Paul Louis Ernest. (1875). <i>Compendio de derecho mercantil que contiene la explicación de los artículos del Código de Comercio y de las leyes mercantiles más recientes, la discusión de las cuestiones controvertidas y modelos de fórmulas</i> . Trad. Emilio Pardo Jr. México: Imprenta de Flores y Monsalve.
	Principios de legislación penal vigente Lic. Emilio Monroy	Lecciones orales del profesor. Código penal vigente en el Distrito Federal y Baja California. Ortolan, Joseph-Louis-Elzéar. (1875). <i>Éléments de droit pénal. Pénalité, juridictions, procédure</i> . Paris: E. Plon, Marescq Ainé. Lozano, José María. (1874). <i>Derecho penal comparado o Código penal del Distrito Federal y territorio de la Baja California</i> . México: Imprenta del Comercio de Nabor Chávez.
Cuarto	Derecho constitucional y administrativo Lic. José María del Castillo Velasco	Lecciones orales sirviendo de base la Constitución de 1857 con sus adiciones y reformas. Castillo Velasco, José María del. (1871). <i>Apuntamientos para el estudio del derecho constitucional mexicano</i> . México: Imprenta del Gobierno, en Palacio. Castillo Velasco, José María del. (1874). <i>Ensayo sobre el derecho administrativo mexicano</i> . México: Taller de Imprenta de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres.
	Derecho internacional y marítimo Lic. Juan Sánchez Azcona	Calvo, Cárlos. (1868). <i>Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América</i> . Paris: D' Amyot, Durand et Pedone-Lauriel. Azpiroz, Manuel. (1876). <i>Código de Extranjería de los Estados Unidos Mexicanos. Ensayo de codificación</i> . México: Imprenta de Jens y Zapiain. Tratados y leyes vigentes en la materia.
	Economía política Lic. Manuel Contreras	Courcelle Seneuil, Jean Gustave. (1874). <i>Tratado teórico y práctico de las operaciones de banca</i> . Paris: Librería de A. Bouret e Hijo. ⁶
Quinto	Procedimientos civiles Lic. Francisco de P. Segura	Lecciones orales, sirviendo de base las leyes vigentes sobre procedimientos civiles del orden común y federal
	Legislación comparada Lic. Eduardo Pankhurst	Mexia, J. Carlos. (1874). <i>Manual de la Constitución de los Estados Unidos</i> . Washington, D.C.: Imprenta de R. Beresford. Las constituciones que han estado vigentes en la República y las constituciones de todos los estados de la Federación.

Sexto	Procedimientos criminales	Disposiciones vigentes sobre los fueros de actualidad con las lecciones orales del profesor. Gutiérrez, Blas José. (1868). <i>Leyes de reforma. Colección de las disposiciones que se conocen con este nombre, publicadas desde el año de 1855 al de 1868</i> . México: El Constitucional.
	Lic. Blas José Gutiérrez	Gutiérrez, Blas José. (1876). <i>Apuntes sobre los fueros y tribunales militares, federales y demás vigentes en la república y sobre las más importantes disposiciones del derecho marítimo internacional y administrativo relacionadas con aquellos</i> . México: Imprenta de J. M. Aguilar Ortiz.
	Medicina legal Dr. Román Ramírez	Casper, Johann Ludwig. (1862). <i>Traité pratique de médecine légale. Rédigé d'après des observations personnelles</i> . Trad. Gustave Germer Baillièrre. Paris: Librairie Médicale Germer Baillièrre. ⁷ Leyes patrias relativas a la materia

Fuente: “Noticia de las obras y materias que han de servir de texto y asignatura en el presente año escolar en la Escuela de Jurisprudencia”, *El Foro* (México), 3 de enero de 1879, p. 7.

Los cambios en los textos de referencia sugieren, en efecto, la revisión permanente en torno a los contenidos y novedades en la literatura jurídica publicada durante aquellos años. Un editorial del diario *La Industria Nacional*, aludió a la importancia de renovar de manera constante los programas de estudio “según el movimiento científico o literario que aumenta cada día”. Postura que propugnó por la libertad de cátedra y las facultades amplias que debían tener los profesores para fijar los contenidos de estudio sin intervención del gobierno. El dinamismo propio del derecho y su proceso de formación era indiscutido: la codificación desplegaba sus alcances en el orden jurídico con consecuencias palpables en la enseñanza. En este sentido, desde el punto de vista de la prensa, algunos programas de la Escuela Nacional de Jurisprudencia debían revisarse porque la simple lectura de las leyes no era suficiente para la formación de los abogados que, de seguir esa línea de

estudio, “poco se distinguirá[n] del tinterillo”.²⁵ El autor de la nota citaba como ejemplo las cátedras de derecho patrio, cuyo énfasis era el estudio de la materia civil a través del código. La crítica a la enseñanza del derecho se resumía, en suma, a que “la ciencia de las leyes no consiste en saberlas de memoria, sino en penetrarse bien de la fuerza y alcance de sus prescripciones”.²⁶

¿Cuál era, entonces, el objetivo de la educación jurídica durante la época y en particular la que se llevaba conforme a los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional de Jurisprudencia? De acuerdo con Bibiano Beltrán, catedrático de derecho constitucional y administrativo de esta institución, la educación que recibían los alumnos ceñía, desde su punto de vista, un método de enseñanza “clásico” que, al no ser superficial o enciclopédico sino metódico, analítico y filosófico en virtud de la calidad docente y de los contenidos, permitía posicionar a la Escuela Nacional como el recinto natural del que egresaban destacados abogados. La reflexión del profesor no deja lugar a dudas del importante papel que esta institución tuvo durante el período (y aún años después) al constituirse como el *alma mater* de un gran número de profesionales en el derecho incorporados a la función pública como diplomáticos, gobernantes y jurisconsultos.²⁷

En este sentido, destaca de igual forma la reflexión del jurista Jacinto Pallares, quien señaló que la educación que recibían los alumnos en la Escuela Nacional de Jurisprudencia era “vasta” se-

²⁵ Tinterillo o huizachero fueron términos comunes durante la época para denominar a aquellos individuos que sin formación o acreditación oficial como abogados se desempeñaban como tales en el foro. Véase Lira, Andrés, “Abogados, tinterillos y huizacheros en el México del siglo XIX”, *Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano*, México, UNAM, 1984.

²⁶ EGUÍLUZ, Tomás, “La enseñanza oficial”, *La Industria Nacional*, México, 15 de febrero de 1880, p. 1.

²⁷ “Discurso pronunciado por el Lic. Bibiano Beltrán al comenzar el curso escolar en la Escuela de Jurisprudencia”, *El Foro*, México, 12 de enero de 1883, p. 30.

gún dos series de conocimientos: unos de riguroso orden científico, y otros de “arte del raciocinio jurídico”. Desde su perspectiva, entre los primeros se encontraban los contenidos de las cátedras de economía política, de principios de legislación, de filosofía e historia del derecho y de medicina legal; mientras que entre los segundos se ubicaban los de derecho patrio (con sus diversas ramificaciones), legislación comparada y derecho romano, materias que consideraba “base y coronamiento de todo estudio jurídico”.²⁸ La frontera entre ambas esferas del conocimiento radicaba en su sentido práctico. Sin una sólida comprensión del derecho (a través de su historia y reflexión filosófica), no podría augurarse una fructífera carrera en los tribunales pues se carecería de criterio (para leer y aplicar los códigos, por ejemplo).

V. PLAN DE ESTUDIOS, 1889

Después de la reforma de 1877 a la ley de instrucción pública, el 5 de enero de 1889 se publicó un nuevo cambio en el diseño curricular de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Se trató de una modificación al Reglamento de la Ley de Instrucción Pública que, en la parte expositiva indicó que obedecía a las opiniones emitidas por la junta de profesores de la institución. Impresiones atendidas por el presidente de la república, Porfirio Díaz, con el propósito de organizar los estudios de derecho según una visión más acorde a las necesidades formativas de los abogados. En consecuencia, la disposición de las cátedras observó el siguiente orden:

²⁸ “Discurso pronunciado por el Lic. Jacinto Pallares en la Escuela de Jurisprudencia al inaugurarse los estudios del año escolar 1884”, *El Foro*, México, 5 de abril de 1884, p. 251. Es reproducción del discurso de la sesión celebrada en enero de ese año.

Cuadro 7. Plan de estudios de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, 1889

Año escolar	Cátedras
Primer año	Derecho romano (historia, personas y cosas) Derecho civil mexicano (historia, personas y cosas)
Segundo año	Derecho romano (obligaciones y acciones) Derecho civil mexicano (obligaciones y herencias)
Tercer año	Derecho mercantil, minero y leyes civiles no codificadas Procedimientos en juicios civiles Primer curso de medicina legal
Cuarto año	Derecho penal (filosófico y positivo) Procedimientos en juicios del orden criminal Segundo curso de medicina legal Práctica en un juzgado de lo civil
Quinto año	Derecho constitucional y administrativo Derecho internacional público Primer curso de economía política Práctica en un juzgado de lo criminal
Sexto año	Derecho internacional privado Filosofía del derecho y oratoria forense Segundo curso de economía política

Fuente: Decreto de reforma al Reglamento de la Ley de Instrucción Pública en lo relativo a la Escuela de Jurisprudencia, 5 de enero de 1889. DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, *Legislación mexicana o Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la independencia de la república*, Tomo XIX, México, Tipografía de E. Dublán y Compañía, 1890, p. 326.

Con ello, la cátedra de derecho natural, impartida hasta entonces durante el primer año, se incorporó al contenido de filosofía del derecho y oratoria forense (último año de estudios); y la de legislación comparada (programada en el quinto año del plan reformado) se concentró en la cátedra de derecho constitucional (quinto año). Asimismo, con el nuevo plan, la materia de derecho internacional se estudió en dos períodos lectivos según la definición de derecho internacional público (quinto año) y derecho internacional privado (sexto año). Énfasis que también se le dio a la cátedra de economía política que de un año se extendió a dos de enseñanza.

El decreto de referencia, en la tradición pormenorizada de mandato gubernamental, señaló el contenido asociado a cada materia y, por ende, la directriz a la que debía sujetarse el ejercicio docente. Por ejemplo, el profesor de filosofía del derecho y oratoria forense debía explicar “el origen y desenvolvimiento histórico de la noción de la justicia en sus relaciones con la legislación y la influencia de esa noción en los derechos relativos a la familia, las personas, los contratos, el derecho penal y la organización del poder público, explicando los diversos sistemas científicos que se han formado sobre el particular”, del mismo modo, también debía explicar la literatura jurídica. En economía política, impartida en dos años escolares, el profesor debía ocuparse en el primero de ellos del contenido teórico de la materia, y en el segundo de la legislación mexicana en relación con las finanzas, impuestos, crédito y la estadística del país. Ejemplos que permiten constatar la orientación que presentó la educación jurídica durante la época y el interés del Estado en su conducción desde la vía de la docencia.

Cabe advertir que el decreto dispuso un período transitorio al que se sujetaron los alumnos al comenzar aquel año escolar de 1889. Las nuevas disposiciones educativas en apariencia no representaron para los estudiantes de nuevo ingreso un inconveniente mayor, sin embargo, para aquellos que tenían uno o más años en las aulas de jurisprudencia las reglas plantearon un reto importante, lo mismo para los profesores adscritos en cada una de las

cátedras. De esta forma, los alumnos de segundo año debieron estudiar “todo el código civil” y el segundo curso de derecho romano; los de tercero debieron inscribir el segundo curso de derecho civil, derecho mercantil, procedimientos civiles y el primer curso de medicina legal; los de cuarto año debieron abocarse al estudio de procedimientos civiles, procedimientos criminales y medicina legal; los de quinto año estudiaron las mismas materias que los de cuarto año; mientras que los del último año de la carrera debieron estudiar procedimientos penales, historia del derecho, oratoria y medicina legal. Una vez transcurrido ese año, el nuevo plan debió seguirse con puntualidad en cada uno de los períodos lectivos. Trayectoria que culminó con la aprobación de una nueva reforma al plan de estudios publicada en 1897. Momento que enmarcó el inicio de un proceso más acelerado de cambios en la enseñanza del derecho a través de la definición curricular que entre 1903 y 1907 orientó la política educativa y los contenidos de jurisprudencia.

VI. REFLEXIONES FINALES

Las reformas a los planes y programas de estudio de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, publicadas en el período comprendido entre 1867 y 1897, sugieren un aspecto sincrónico entre la enseñanza y la formación jurídica de la época a través de la codificación y desarrollo de una doctrina nacional. La Escuela Nacional de Jurisprudencia aglutinó una suma importante de anhelos e intereses que orientó un modelo educativo que replicaron sus pares en el interior de la república. Los cambios en relación con las cátedras y contenidos reflejan algunos de estos propósitos. En este sentido, Alfonso Reyes señaló que entre los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria, “no pocos optaban por la [carrera] de abogado, la más ostensible entonces, asiento de preferencia para el espectáculo de la inminente transformación social, asiento que permitía fácilmente saltar al escenario. La opinión lo esperaba

todo de los abogados”.²⁹ Testimonio en el que sobresale el lugar privilegiado de esta institución en la enseñanza y formación de abogados.

Con las reformas a los planes de estudio hacia finales del siglo XIX, las autoridades escolares aspiraron a “que la escuela [Nacional de Jurisprudencia] deje de ser una institución simple destinada solo a crear litigantes fuertes en los códigos y capaces de no perderse en sus laberintos, y comience a aspirar a formar abogados y a hacer progresar las ciencias jurídicas. Por este último concepto, ascenderá de su carácter inferior de formadora de litigantes y jueces, a otro superior y realmente científico”.³⁰ Con ello, los aparentes signos de agotamiento de un paradigma que mantenía a la abogacía mexicana entre la herencia y los albores de cambio esperaron nuevos ímpetus.³¹

²⁹ Cita en DEL ARENAL, Jaime, “¿Que con esto obrará en justicia». Un inédito juvenil y muy jurídico de Alfonso Reyes”, *Historia Mexicana*, vol. 70, núm. 2, 278, México, El Colegio de México, octubre-diciembre de 2020, pp. 895-896. Asimismo, en relación con otro abogado destacado y sus motivos para elegir la Escuela Nacional de Jurisprudencia, véase BLANCO, Mónica, *Historia de una utopía. Toribio Esquivel Obregón (1864-1946)*, México, El Colegio de México, UNAM, 2012, pp. 41-43.

³⁰ MENDIETA Y NÚÑEZ, Lucio, *Historia de la Facultad de Derecho*, México, UNAM, 1975, p. 135.

³¹ JIMÉNEZ GÓMEZ, Juan Ricardo, *Formación y discurso de los juristas. Estudios y exámenes recepcionales de los abogados en Querétaro en el siglo XIX*, México, Miguel Ángel Porrúa, Universidad Autónoma de Querétaro, 2008, p. 8. Véase, asimismo, la reflexión de Manuel Torres Torija quien apuntó que la escuela debía formar alumnos en una “educación completa, sea física, intelectual y moral”. *La educación laica. Discusión sostenida en el 2o. Concurso Científico Nacional con relación a las memorias presentadas por los señores Ricardo Gómez, Manuel Torres Torija, Luis E. Ruiz y Miguel S. Macedo*, México, Oficina Tip. de la Secretaría de Fomento, 1898, pp. 8-9.